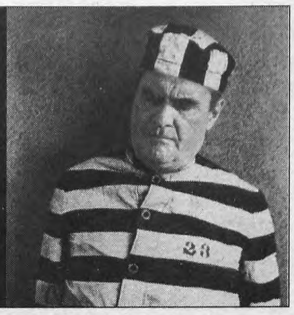
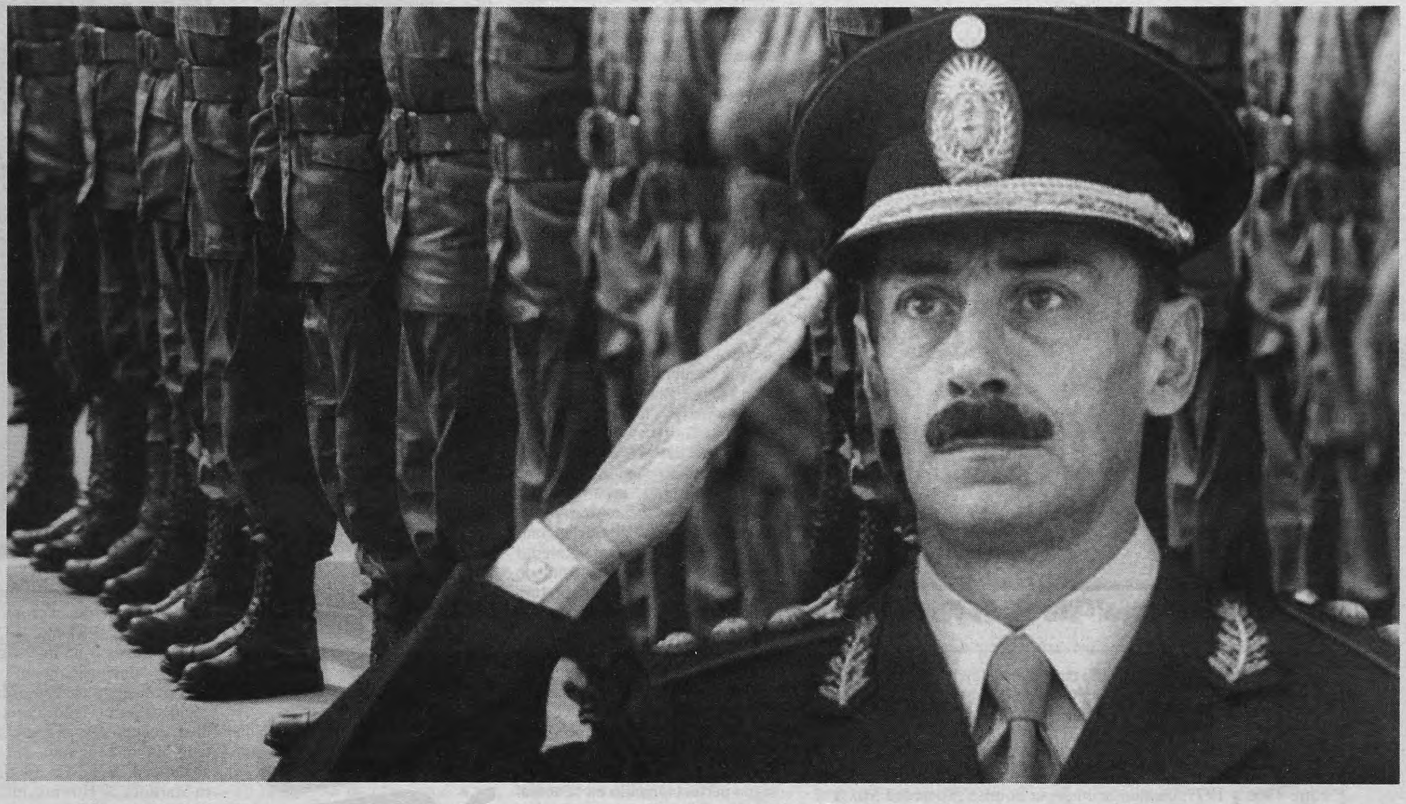
25 años del Golpe



El mal absoluto



Por Osvaldo Soriano

Soriano en Bruselas, viendo por televisión un bigote marcial que le demostraba que ya no tenía país, que no habría vuelta por muchos años. Era el 24 de marzo de 1976 y comenzaba una nueva ruta para el escritor, una que compartiría "con miles de otros mejores que yo" y que el régimen llamaría la "campaña antiargentina en el exterior". Al cumplirse 20 años del golpe, Soriano recordó en **Página/12** un día negro de su vida.

Recuerdo aquel día del golpe de Estado que me tocó vivir desde Bruselas: el noticiero de la televisión belga mostraba tipos bigotudos, ceñudos y entorchados que parecían la caricatura de una irrecuperable republiqueta bananera. Esa mañana que supe que había perdido la Argentina de mi infancia, la de mi escuela y mi primer trabajo. Perdía, como millones de compatriotas, cosas íntimas e intransferibles; dejaba atrás una manera de explicarme la vida, los fundamentos sobre los que había construido mi propio imaginario. Tenía treinta y tres años recién cumplidos. Luego maduré boxeando contra la sombra de la dictadura, lejos, sin pensar mucho en mí, contando muertos, atragantado por nuevos rencores. Fui, con las Madres de Plaza de Mayo, con Cortázar, Osvaldo Bayer, David Viñas, con miles de otros mejores que yo, uno más de lo que los militares llamaban "campaña antiargentina". Ese es uno de mis más íntimos orgullos.

La dictadura ha significado, para mí, el mal absoluto. No me salen matices para explicarla. Quiero decir, asimilo a aquellos militares con el régimen nazi y eso me impide comprender las razones de los que trabajaron de cerca o de lejos para ella, de los que colaboraron e incluso de quienes fueron actores pasivos pero conscientes. No les creo una palabra a los que dicen aún hoy "yo no sabía lo que pasaba". Me es imposible perdonar aquel "por algo será", el "somos derechos y humanos". Me siguen pareciendo inexcusables las conversaciones y los toqueteos con el poder. Los almuerzos de intelectuales con Videla. La estrategia de la reverencia, el codazo y la palmada. Era mejor estar equivocado contra la dictadura que tener razón obedeciéndola.

Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. Miramos con recelo, intentamos entender este fin de siglo, pero nada podrá hacernos olvidar, perdonar. Me acuerdo bien: volví por unos días a Buenos Aires, estaba viviendo en casa de Tito Cossa y Marta Degrazia, nos acogía Rafael Perrota en el viejo diario *El Cronista*, que había sido más o menos socializado y en esos días secuestraron a Haroldo Conti, el autor de *Sudeste*, una de las grandes novelas argentinas. Me viene a la memoria la cara de Videla, aplaudido en cines y estadios. La pesada ausencia de Conti, de Paco Urondo, Vicky Walsh, caída en combate pocos meses antes que su padre. Yo estaba vagamente enamorado de Vicky aunque ella no lo supiera.

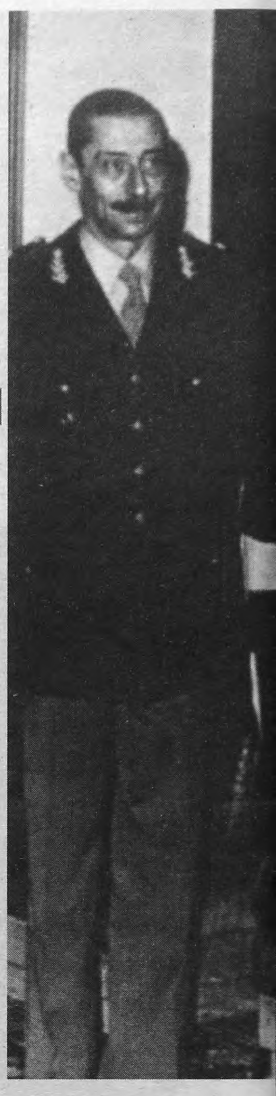
De modo que no puedo escribir sin odio. Mataron a treinta mil jóvenes y a algunos viejos, guerrilleros o no. Destruyeron la educación, los sindicatos combativos, la cultura, la salud, la ciencia, la conciencia. Desterraron la solidaridad, el barrio, la noche populosa. Prohibieron a Einstein y a Gardel. Abrieron autopistas y llenaron de cadáveres los cimientos del país; dejaron una sociedad calada por el terror que en estos días asoma en el juicio de Catamarca. Somos al mismo tiempo el testigo que se desdice y la valiente monja Pelloni. Somos el juez iracundo, el abogado gordo y el tipo al que retaron por estar con las manos en los bolsillos. ¿Acaso no fue la dictadura, su largo brazo estirado a través del tiempo, la que mató a María Soledad? ¿No es el Proceso que sigue asesinando pibes, asustando, castrando por procuración?

En esos años vergonzosos se impusieron los valores del éxito a cualquier costo por sobre la idea de felicidad compartida. El plan de aniquilamiento desató por su propia lógica una guerra a la vez humillante y absurda. Eso dejaron. Un escenario vacío y oscuro que había que tomar en silencio. No quedaban civiles armados en 1983; sólo conciencias heridas y una pena infinita. Lo curioso para quien volvía del extranjero era que la gente había enterrado definitivamente a Perón, se inclinaba por un abogado de Chascomús que antes le había propuesto a Videla un pacto cívico-militar y después impulsó un acuerdo radical-menemista.

Lo que pasó en las almas de los argentinos entre 1976 y 1983 es todavía un enigma. Los veinte años que hemos vivido después fueron una sucesión de avances y retrocesos, de incógnitas abiertas. Sé que hay mil hipótesis y las he escuchado todas. ¿Fue cielo alguna vez la tierra que se convirtió en infierno? No lo sé, los abuelos de nuestros padres decían que sí. Sin embargo no hay razón para creer en viejas fábulas. Hoy tenemos otras. Cuentos de príncipes y cenicientas, héroes con amnesia, sobrevivientes perplejos, chicos que no se rinden. ¿Por qué habrían de hacerlo si lo que está en juego es su futuro? Acaso a ellos les espera una gran aventura republicana, pacífica y fraternal. No se trata de una nueva ideología. Ni siquiera de cambiar la historia. Simplemente decirle no al olvido y levantar las viejas banderas de Mayo, las que alguna vez hicieron de este país una Nación rebelde y orgullosa.

(Publicado originalmente en **Página/12** *el 24 de marzo de 1996.)*

Los dueños de la espada



Por Miguel Bonasso

La historia secreta del 24 de marzo todavía no ha sido escrita. Ni siquiera existe un análisis riguroso de las causas que lo motivaron. En el imaginario colectivo, alimentado por las malversaciones teóricas de un vasto sector de la clase política y la inmensa mayoría de los medios, sigue gravitando una tesis banal: ante el vacío de poder generado por el catastrófico gobierno de María Estela Martínez de Perón, con su secuela de violencia generalizada, las Fuerzas Armadas ocuparon –de manera casi natural– el Estado. Una tesis que ha servido, entre otras cosas, para prohijar la teoría de los dos demonios y ocultar un hecho decisivo: el contenido económico y social (de clase, podría decirse), que tuvo el golpe militar, aunque encubriera sus verdaderos propósitos en la lucha contra "la subversión" y la "delincuencia económica".

El golpe del '76 encerraba un proyecto socio-económico cuyos objetivos últimos serían alcanzados –paradójicamente– en el gobierno "peronista" de Carlos Saúl Menem con el desmantelamiento del Estado de bienestar fundado por el primer Perón y la apertura de la economía a la "globalización". Como lo ha dicho con claridad y cierta envidia el propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz (h.), al señalar que la política económica de Domingo Felipe Cavallo representa la "continuidad" de la suya. El esquema, por cierto, se sigue perfeccionando en la actual gestión de la Alianza, con la adscripción a los dictados del Consenso de Washington y la renovada flexibilización de una clase social a la que ya hicieron de goma.

Ese esquema económico constituyó la razón principal de un golpe de Estado que fue planeado con gran anticipación hasta en sus menores detalles, como lo prueba –entre otros documentos– el Plan del Ejército de febrero de 1976, firmado por el entonces jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola. Donde puede apreciarse a simple vista que los pretendidos "excesos" de algunos individuos fueron en verdad políticas establecidas desde el alto mando. Incluyendo el robo de niños, que el actual jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, sigue negándose a reconocer.

La decisión de dar el golpe fue tomada mucho antes del 24 de marzo. Y en esa decisión pesó de manera determinante el consejo y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local estrechamente ligados al capital internacional (hoy diríamos, globalizado). Encarnados en el dirigente empresario José Alfredo Martínez de Hoz, al que pocos señalan hoy en día su carácter de ideólogo de la carnicería que ejecutaron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Rubén Agosti, como jefes de la primera junta militar. Sin embargo, el propio "Joe" reconoció en 1984 ante la Cámara de Diputados (que investigaba la dolosa "nacionalización" de la Compañía Italo Argentina de Electricidad) que él visitó al general Videla, cuando éste era jefe del Estado Mayor Conjunto, "en el curso del año 1975". En ese momento Martínez de Hoz presidía el poderoso Consejo Empresario y concurrió junto con otros hombres de negocios para expresarle al militar su preocupación porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y recordarle que se debía asegurar "el imperio del orden sobre todas las cosas". Videla escuchó con reverencia clasemediera las preocupaciones de este patricio, hijo y nieto de los terratenientes que fundaron la Sociedad Rural y articularon sus intereses con los del capital financiero internacional (Rockefeller, banca Morgan, etc.) y supo cumplir su papel.

Para ese entonces, la movilización de las bases sindicales contra el Rodrigazo (el brutal plan de ajuste dispuesto por el ministro de Economía de Isabel, Celestino Rodrigo) había logrado la expulsión del gobierno y del país del "Brujo" José López Rega, que pretendía ser el poder tras el trono de la viuda de Perón. Hecho decisivo que fue inteligentemente interpretado por los sectores dominantes: la derecha peronista (política y sindical) ya no les servía como instrumento para domesticar la base social que decían representar; su desgaste los inhabilitaba para encarar con rigor y a fondo la reforma del Estado y el aparato productivo que propiciaba el gran capital.

El "obispo rojo" de San Nicolás

Por M.B.

Ni el Vaticano ni la jerarquía católica suelen evocar al fallecido obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a pesar de que su muerte (en tiempos de la dictadura y en un sospechoso accidente automovilístico) se parece demasiado a la del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli.

Monseñor Ponce de León condujo la diócesis de San Nicolás entre 1966 y 1977, cuando la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) le imprimía aún un fuerte sesgo industrial a la ciudad. El obispo creó la escuela diocesana de Servicio Social y envió sacerdotes a las villas de emergencia, lo que le valió ser llamado "el obispo rojo" por los militares y las patronales de la zona. El encono aumentó después del golpe, cuando el prelado comenzó a recibir a familiares de víctimas de la represión. El día que se "accidentó" en la rotonda de Ramallo, Ponce de León llevaba a Buenos Aires una serie de carpetas con información sobre obreros de Somisa y Acindar desaparecidos. La información desapareció y la policía impidió que la prensa tomara fotografías del vehículo en el que el obispo encontró la muerte. El canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, que también se desempeñaba como capellán de la cárcel local, no reclamó la documentación que llevaba el obispo e involucraba al comandante del Primer Cuerpo, general Carlos Suárez Mason, al coronel Camblor del regimiento de Junín y al teniente coronel Saint Aman, a cargo del regimiento de San Nicolás. Según Víctor Oscar Martínez, un muchacho que acompañaba a Ponce de León en el momento del accidente, el obispo había anunciado su propia muerte. Cuando se enteró del otro accidente automovilístico que le costó la vida a su "hermano en Cristo", el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, sentenció: "Yo voy a ser el próximo". Pocos días después del segundo "accidente", Víctor Martínez, que en esa época cumplía la conscripción en la Prefectura, fue arrestado, interrogado y torturado hasta el desmayo por orden del teniente coronel Saint Aman, que le preguntaba insistentemente a cuántos "extremistas" había refugiado "el obispo rojo".

Los dueños de la espada

Por Miguel Bonasso

La historia secreta del 24 de marzo todavía no ha sido escrita. Ni siquiera existe un análisis riguroso de las causas que lo motivaron. En el imaginario colectivo, alimentado por las malversaciones teóricas de un vasto sector de la clase política y la inmensa mayoría de los medios, sigue gravitando una tesis banal: ante el vacío de poder generado por el catastrófico gobierno de María Estela Martínez de Perón, con su secuela de violencia generalizada, las Fuerzas Armadas ocuparon –de manera casi natural– el Estado. Una tesis que ha servido, entre otras cosas, para prohijar la teoría de los dos demonios y ocultar un hecho decisivo: el contenido económico y social (de clase, podría decirse), que tuvo el golpe militar, aunque encubriera sus verdaderos propósitos en la lucha contra "la subversión" y la "delincuencia económica".

El golpe del '76 encerraba un proyecto socio-económico cuyos objetivos últimos serían alcanzados –paradójicamente– en el gobierno "peronista" de Carlos Saúl Menem con el desmantelamiento del Estado de bienestar fundado por el primer Perón y la apertura de la economía a la "globalización". Como lo ha dicho con claridad y cierta envidia el propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz (h.), al señalar que la política económica de Domingo Felipe Cavallo representa la "continuidad" de la suya. El esquema, por cierto, se sigue perfeccionando en la actual gestión de la Alianza, con la adscripción a los dictados del Consenso de Washington y la renovada flexibilización de una clase social a la que ya hicieron de goma.

Ese esquema económico constituyó la razón principal de un golpe de Estado que fue planeado con gran anticipación hasta en sus menores detalles, como lo prueba –entre otros documentos– el Plan del Ejército de febrero de 1976, firmado por el entonces jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola. Donde puede apreciarse a simple vista que los pretendidos "excesos" de algunos individuos fueron en verdad políticas establecidas desde el alto mando. Incluyendo el robo de niños, que el actual jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, sigue negándose a reconocer.

La decisión de dar el golpe fue tomada mucho antes del 24 de marzo. Y en esa decisión pesó de manera determinante el consejo y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local estrechamente ligados al capital internacional (hoy diríamos, globalizado). Encarnados en el dirigente empresario José Alfredo Martínez de Hoz, al que pocos señalan hoy en día su carácter de ideólogo de la carnicería que ejecutaron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Rubén Agosti, como jefes de la primera junta militar. Sin embargo, el propio "Joe" reconoció en 1984 ante la Cámara de Diputados (que investigaba la dolosa "nacionalización" de la Compañía Italo Argentina de Electricidad) que él visitó al general Videla, cuando éste era jefe del Estado Mayor Conjunto, "en el curso del año 1975". En ese momento Martínez de Hoz presidía el poderoso Consejo Empresario y concurrió junto con otros hombres de negocios para expresarle al militar su preocupación porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y recordarle que se debía asegurar "el imperio del orden sobre todas las cosas". Videla escuchó con reverencia clasemediera las preocupaciones de este patricio, hijo y nieto de los terratenientes que fundaron la Sociedad Rural y articularon sus intereses con los del capital financiero internacional (Rockefeller, banca Morgan, etc.) y supo cumplir su papel.

Para ese entonces, la movilización de las bases sindicales contra el Rodrigazo (el brutal plan de ajuste dispuesto por el ministro de Economía de Isabel, Celestino Rodrigo) había logrado la expulsión del gobierno y del país del "Brujo" José López Rega, que pretendía ser el poder tras el trono de la viuda de Perón. Hecho decisivo que fue inteligentemente interpretado por los sectores dominantes: la derecha peronista (política y sindical) ya no les servía como instrumento para domesticar la base social que decían representar; su desgaste los inhabilitaba para encarar con rigor y a fondo la reforma del Estado y el aparato productivo que propiciaba el gran capital.

> Los pasos de la conspiración que llevó al golpe se pueden entrever en documentos y declaraciones, en movimientos y cercos. Los días tensos de 1975 y del verano de 1976, reconstruidos un cuarto de siglo después.

Para colmo, en las Coordinadoras de Base sindicales iba surgiendo un nuevo tipo de dirigentes que el líder radical Ricardo Balbín no trepidaría en denunciar como "guerrilla industrial" y que constituían un potencial más peligroso para la "entente" de generales y empresarios que el accionar militar de las organizaciones armadas (ERP y Montoneros) que estaban lejos de representar un verdadero desafío bélico. En rigor, cuando llegó el golpe, la guerrilla guevarista del ERP había sufrido ya el desastre de Monte Chingolo y estaba por ser aniquilada en Tucumán. Montoneros aún conservaba la mayoría de sus cuadros y era más peligrosa para los militares por su influencia sobre el ala juvenil y radicalizada del movimiento de masas, pero pesaba sobre ella el anatema de Perón en la Plaza de Mayo (1° de mayo de 1974) y su propia tendencia a militarizar la política que la llevaría a encerrarse en el aparato antes que a replegarse en la base social para afrontar un largo período de resistencia. Sin embargo, los militares no ignoraban que había vasos comunicantes entre la "guerrilla industrial" y la guerrilla a secas, y no los subestimaron, como queda de manifiesto en el citado plan del golpe redactado por Viola.

Los contactos entre empresarios y militares se hicieron cada vez más frecuentes con la intermediación de un hombre que combinaba la filosofía de Ortega y Gasset (era amigo de su discípulo Julián Marías) con los buenos negocios: el ex ministro de Justicia de la dictadura de Alejandro Lanusse, Jaime "Jacques" Periaux. Un empresario vinculado como "Joe" a la oligarquía (La Vascongada, La Querencia S.A.) y al capital extranjero (Citroën, Pfaff Bromberg, etc.). La última de esas reuniones –según Martínez de Hoz– se hizo con Massera como anfitrión en el comando de la Armada. Para ese entonces las principales empresas del país –entre las que destacaba la siderúrgica Acindar, fundada por el ingeniero Arturo Acevedo y presidida casualmente por "Joe", el futuro ministro de Economía del golpe– habían establecido un sistema de espionaje y vigilancia, junto con la policía y los servicios, para individualizar a los principales activistas. En mayo de 1975, la represión de la gran huelga de Villa Constitución, dirigida por Alberto Piccinini –un metalúrgico rebelde a la conducción de Lorenzo Miguel– había constituido un ensayo general de los métodos que se aplicarían después del 24 de marzo, incluyendo el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país.

Pero el golpe de clase necesitaba además cierto consenso o al menos neutralidad de la clase política, que viniera a complementar la decidida participación de gran parte de la jerarquía católica. En octubre del '75 algunos jefes militares como el comandante del Primer Cuerpo, Carlos Guillermo Suárez Mason, comenzaron una serie de reuniones secretas con altos dirigentes de la Unión Cívica Radical, para sondearlos acerca de la actitud que adoptarían ante el derrocamiento de Isabel. La respuesta debió complacerlos, porque en febrero del '76 Viola pudo estampar esta profecía en el plan de operaciones: "Otros agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrían ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista (del ex marino Francisco Manrique) es probable que no se opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación".

Tampoco la dirigencia justicialista (rezagada en el ranking de los "oponentes potenciales") les daba mayor dolor de cabeza: "De los agrupamientos incluidos en Prioridad IV sólo del Movimiento Nacional Justicialista, se prevén manifestaciones parciales y como consecuencia del cambio".

No es casual, en cambio, que entre los "oponentes activos" a nivel gremial (Prioridad 1), colocarán a "las agrupaciones de base, la ex CGT de los Argentinos, la Juventud Trabajadora Peronista, el Movimiento Sindical de Base, el Movimiento Sindical Combativo" y otras organizaciones enfrentadas con la dirigencia gremial, que podían actuar contra "la estabilización y solución del problema social".

Tampoco es casual que en las primeras horas de este golpe, que el Plan de Viola ordenaba "encubrir" bajo la apariencia de "acciones antisubversivas", la guadaña cayera con ferocidad sobre el movimiento sindical alternativo: doscientos delegados de base "chupados" en Córdoba y centenares de secuestros y arrestos en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Primer paso de una estrategia represiva que seguiría constantemente hasta alcanzar un porcentual estratégico relevado en su momento por la Conadep y convenientemente olvidado por una sociedad desmemoriada: el 46 por ciento de los detenidos-desaparecidos por la dictadura militar pertenecía a esa especie en extinción que solía llamarse clase trabajadora.

El "obispo rojo" de San Nicolás

Por M.B.

Ni el Vaticano ni la jerarquía católica suelen evocar al fallecido obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a pesar de que su muerte (en tiempos de la dictadura y en un sospechoso accidente automovilístico) se parece demasiado a la del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli.

Monseñor Ponce de León condujo la diócesis de San Nicolás entre 1966 y 1977, cuando la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) le imprimía aún un fuerte sesgo industrial a la ciudad. El obispo creó la escuela diocesana de Servicio Social y envió sacerdotes a las villas de emergencia, lo que le valió ser llamado "el obispo rojo" por los militares y las patronales de la zona. El encono aumentó después del golpe, cuando el prelado comenzó a recibir a familiares de víctimas de la represión. El día que se "accidentó" en la rotonda de Ramallo, Ponce de León llevaba a Buenos Aires una serie de carpetas con información sobre obreros de Somisa y Acindar desaparecidos. La información desapareció y la policía impidió que la prensa tomara fotografías del vehículo en el que el obispo encontró la muerte. El canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, que también se desempeñaba como capellán de la cárcel local, no reclamó la documentación que llevaba el obispo e involucraba al comandante del Primer Cuerpo, general Carlos Suárez Mason, al coronel Camblor del regimiento de Junín y al teniente coronel Saint Aman, a cargo del regimiento de San Nicolás. Según Víctor Oscar Martínez, un muchacho que acompañaba a Ponce de León en el momento del accidente, el obispo había anunciado su propia muerte. Cuando se enteró del otro accidente automovilístico que le costó la vida a su "hermano en Cristo", el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, sentenció: "Yo voy a ser el próximo". Pocos días después del segundo "accidente", Víctor Martínez, que en esa época cumplía la conscripción en la Prefectura, fue arrestado, interrogado y torturado hasta el desmayo por orden del teniente coronel Saint Aman, que le preguntaba insistentemente a cuántos "extremistas" había refugiado "el obispo rojo".

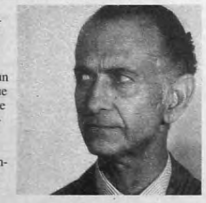
Ya estaban "bajo tierra"

Por M.B.

Acindar, la acerera fundada por Arturo Acevedo y presidida durante un tiempo por José Alfredo Martínez de Hoz, jugó un papel estratégico en la represión clandestina. El ex inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, que estuvo en el Ministerio del Interior en tiempos del general Albano Harguindeguy, denunció en 1983 ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), que Acindar "pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe de Personal, Pedro Aznárez, y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini". "Acindar –reveló el ex policía– se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas."

En su libro *Desaparecidos/Desocupados*, el periodista rosarino Carlos del Frade enumera diversos casos de activistas de Acindar que desaparecieron para siempre en 1976 y 1977. También denuncia que el helipuerto de la empresa en Villa Constitución era usado por la Policía Federal para estacionar los helicópteros que participaron en la represión de la gran huelga de 1975 y que las instalaciones fabriles también albergaron automóviles Ford Falcon sin patentes, policías de civil y el temible comando "Los Pumas".

En 1976, el aristocrático general Alcides López Aufranc, que había estudiado en Saint Cyr y había sido jefe de Estado Mayor del Ejército en tiempos de Lanusse, reemplazó a Joe Martínez de Hoz, en la presidencia de la empresa siderúrgica. En 1976, en un cóctel con otros empresarios, López Aufranc se jactó de que veintitrés delegados de base de Villa Constitución "ya no darían problemas", porque estaban "bajo tierra". Entre los desaparecidos de Acindar figura Nadia Doria, de la sección IBM de la empresa, que era compañera de Alberto Piccinini, el secretario general de la UOM de Villa Constitución. Nadia forma parte de los desaparecidos de origen italiano, por los cuales reclama la Justicia peninsular.



Luego de la represión –cuenta Del Frade– Acindar se convirtió en el quinto deudor privado con un pasivo de 652.193.000 dólares que pudo transferir al Estado mediante seguros de cambio. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central durante la dictadura militar, había favorecido a los grandes empresarios endeudados "nacionalizando" su deuda.

Los pasos de la conspiración que llevó al golpe se pueden entrever en documentos y declaraciones, en movimientos y cercos. Los días tensos de 1975 y del verano de 1976, reconstruidos un cuarto de siglo después.

Para colmo, en las Coordinadoras de Base sindicales iba surgiendo un nuevo tipo de dirigentes que el líder radical Ricardo Balbín no trepidaría en denunciar como "guerrilla industrial" y que constituían un potencial más peligroso para la "entente" de generales y empresarios que el accionar militar de las organizaciones armadas (ERP y Montoneros) que estaban lejos de representar un verdadero desafío bélico. En rigor, cuando llegó el golpe, la guerrilla guevarista del ERP había sufrido ya el desastre de Monte Chingolo y estaba por ser aniquilada en Tucumán. Montoneros aún conservaba la mayoría de sus cuadros y era más peligrosa para los militares por su influencia sobre el ala juvenil y radicalizada del movimiento de masas, pero pesaba sobre ella el anatema de Perón en la Plaza de Mayo (1° de mayo de 1974) y su propia tendencia a militarizar la política que la llevaría a encerrarse en el aparato antes que a replegarse en la base social para afrontar un largo período de resistencia. Sin embargo, los militares no ignoraban que había vasos comunicantes entre la "guerrilla industrial" y la guerrilla a secas, y no los subestimaron, como queda de manifiesto en el citado plan del golpe redactado por Viola.

Los contactos entre empresarios y militares se hicieron cada vez más frecuentes con la intermediación de un hombre que combinaba la filosofía de Ortega y Gasset (era amigo de su discípulo Julián Marías) con los buenos negocios: el ex ministro de Justicia de la dictadura de Alejandro Lanusse, Jaime "Jacques" Periaux. Un empresario vinculado como "Joe" a la oligarquía (La Vascongada, La Querencia S.A.) y al capital extranjero (Citroën, Pfaff Bromberg, etc.). La última de esas reuniones –según Martínez de Hoz– se hizo con Massera como anfitrión en el comando de la Armada. Para ese entonces las principales empresas del país –entre las que destacaba la siderúrgica Acindar, fundada por el ingeniero Arturo Acevedo y presidida casualmente por "Joe", el futuro ministro de Economía del golpe– habían establecido un sistema de espionaje y vigilancia, junto con la policía y los servicios, para individualizar a los principales activistas. En mayo de 1975, la represión de la gran huelga de Villa Constitución, dirigida por Alberto Piccinini –un metalúrgico rebelde a la conducción de Lorenzo Miguel– había constituido un ensayo general de los métodos que se aplicarían después del 24 de marzo, incluyendo el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país.

Pero el golpe de clase necesitaba además cierto consenso o al menos neutralidad de la clase política, que viniera a complementar la decidida participación de gran parte de la jerarquía católica. En octubre del '75 algunos jefes militares como el comandante del Primer Cuerpo, Carlos Guillermo Suárez Mason, comenzaron una serie de reuniones secretas con altos dirigentes de la Unión Cívica Radical, para sondearlos acerca de la actitud que adoptarían ante el derrocamiento de Isabel. La respuesta debió complacerlos, porque en febrero del '76 Viola pudo estampar esta profecía en el plan de operaciones: "Otros agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrían ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista (del ex marino Francisco Manrique) es probable que no se opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación".

Tampoco la dirigencia justicialista (rezagada en el ranking de los "oponentes potenciales") les daba mayor dolor de cabeza: "De los agrupamientos incluidos en Prioridad IV sólo del Movimiento Nacional Justicialista, se prevén manifestaciones parciales y como consecuencia del cambio".

No es casual, en cambio, que entre los "oponentes activos" a nivel gremial (Prioridad 1), colocarán a "las agrupaciones de base, la ex CGT de los Argentinos, la Juventud Trabajadora Peronista, el Movimiento Sindical de Base, el Movimiento Sindical Combativo" y otras organizaciones enfrentadas con la dirigencia gremial, que podían actuar contra "la estabilización y solución del problema social".

Tampoco es casual que en las primeras horas de este golpe, que el Plan de Viola ordenaba "encubrir" bajo la apariencia de "acciones antisubversivas", la guadaña cayera con ferocidad sobre el movimiento sindical alternativo: doscientos delegados de base "chupados" en Córdoba y centenares de secuestros y arrestos en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Primer paso de una estrategia represiva que seguiría constantemente hasta alcanzar un porcentual estratégico relevado en su momento por la Conadep y convenientemente olvidado por una sociedad desmemoriada: el 46 por ciento de los detenidos-desaparecidos por la dictadura militar pertenecía a esa especie en extinción que solía llamarse clase trabajadora.

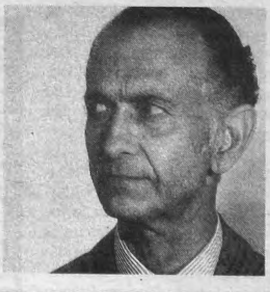
Ya estaban "bajo tierra"

Por M.B.

Acindar, la acerera fundada por Arturo Acevedo y presidida durante un tiempo por José Alfredo Martínez de Hoz, jugó un papel estratégico en la represión clandestina. El ex inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, que estuvo en el Ministerio del Interior en tiempos del general Albano Harguindeguy, denunció en 1983 ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), que Acindar "pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe de Personal, Pedro Aznárez, y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini". "Acindar –reveló el ex policía– se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas."

En su libro *Desaparecidos/Desocupados*, el periodista rosarino Carlos del Frade enumera diversos casos de activistas de Acindar que desaparecieron para siempre en 1976 y 1977. También denuncia que el helipuerto de la empresa en Villa Constitución era usado por la Policía Federal para estacionar los helicópteros que participaron en la represión de la gran huelga de 1975 y que las instalaciones fabriles también albergaron automóviles Ford Falcon sin patentes, policías de civil y el temible comando "Los Pumas".

En 1976, el aristocrático general Alcides López Aufranc, que había estudiado en Saint Cyr y había sido jefe de Estado Mayor del Ejército en tiempos de Lanusse, reemplazó a Joe Martínez de Hoz, en la presidencia de la empresa siderúrgica. En 1976, en un cóctel con otros empresarios, López Aufranc se jactó de que veintitrés delegados de base de Villa Constitución "ya no darían problemas", porque estaban "bajo tierra". Entre los desaparecidos de Acindar figura Nadia Doria, de la sección IBM de la empresa, que era compañera de Alberto Piccinini, el secretario general de la UOM de Villa Constitución. Nadia forma parte de los desaparecidos de origen italiano, por los cuales reclama la Justicia peninsular.



Luego de la represión –cuenta Del Frade– Acindar se convirtió en el quinto deudor privado con un pasivo de 652.193.000 dólares que pudo transferir al Estado mediante seguros de cambio. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central durante la dictadura militar, había favorecido a los grandes empresarios endeudados "nacionalizando" su deuda.

Variaciones sobre el olvido (II)

Por Mario Benedetti

Los pueblos siempre recuerdan, pero una forma de ayudarlos (y ayudarnos) a recordar es describir cómo era el pasado cuando aún era presente. Las palabras, aunque hayan sido lavadas del rencor y la venganza, siguen siendo palabras: existen. Los desaparecidos se esfuman, pero la palabra *desaparecido* adquiere desde ahora una nueva y escalofriante acepción. Ya no corresponderá a la paloma que se vuelve ausencia en la galera del prestidigitador para luego emerger de una de sus mangas; ahora alude más bien al niño que se hizo humo ante la mirada atónita de las Abuelas de Plaza de Mayo y no hay arte de magia que lo haga renacer. La maldición de la tortura fue, existió (y en tantos lados existe aún), pero los olvidadores tratan de borrarla, procuran que la prensa no ose decir ese nombre y que las asociaciones pro derechos humanos no sepan ya cómo destacarla en su lista mundial de abyecciones; en todo caso, los olvidadores toleran que la palabra tortura sobreviva como un digno ejemplo de *obediencia debida* o un matiz de celo excesivo. No obstante, la palabra tortura permanece, no sólo en el lenguaje cotidiano, sino también en el de las cicatrices, las mutilaciones, los muñones de vida, las franjas de muerte.

La palabra es probablemente la mayor dificultad que enfrentan los olvidadores profesionales, porque la vocación congénita de la palabra no es omitir, sino nombrar, así como la justicia está para juzgar y no para complicarla en el olvido. Luciano Rincón se refería, en un reciente artículo de *El País*, al "hecho curioso de que haber sido antifranquista se está empezando a convertir en algo de mal gusto". Algo parecido pasa en Portugal con quienes protagonizaron la *revolución de los claveles*. Acaso tampoco falte mucho para que en las vigiladas democracias de la Argentina y Uruguay el hecho de haberse opuesto a las respectivas dictaduras empiece a convertirse en antigualla o recuerdo fósil. Sin embargo, pese a todo, para la injusticia sólo hay un remedio y éste no es el olvido, sino la justicia.

El cálculo que suelen hacer los olvidadores es que ellos olvidan a plazo fijo (y con fructuosos intereses) y que en todo caso serán sus sucesores quienes deberán hacer frente al rechazo popular. Juzgar el pasado no es faena cómoda, pero al menos no es inútil como el olvido. Los olvidadores oficiales, que a menudo proclaman ser portavoces del pueblo, deberían tener cierta osadía, aunque fuese en dosis mínimas, si es que quieren asumir una cuota parte de la dignidad colectiva. El olvido es un barniz, o incluso la propuesta de una imagen espuria, pero bajo el barniz o la imagen fraudulenta la realidad finalmente surge. Por debajo del falso Altmann aparece en una afinada operación de *pentimento* histórico, el Klaus Barbie de la realidad, y los olvidadores de un *aquí* cualquiera no se atreven a defender *allá* al "obediente debido" que envió medio centenar de niños a la muerte. No obstante, aun esa invasión del pasado abyecto por la justicia presente incluye un detalle revelador. El falso pasaporte a nombre de Altmann le fue extendido a Klaus Barbie por la CIA, que, con pleno conocimiento de sus crímenes, no tuvo reparo alguno en reclutarlo y considerarlo como uno de los suyos. No obstante, este dato espectacular sólo figura en la gran prensa internacional como una mera información y no parecen abundar los editorialistas que se atrevan a calificar esta democrática inmoralidad. Todos acusan (con razón) a Barbie, pero nadie se acuerda de la benemérita CIA.

El rencor y la venganza inferiorizan al rencoroso y al vengativo. Ah, pero la justa sanción de la tortura y otras violaciones de los derechos humanos dignifican a la humanidad. "La tortura no es inhumana –decía Sartre–, es simplemente un crimen innoble y crapuloso, cometido por hombres y que los demás hombres pueden y deben reprimir." La tortura no puede ser purgada torturando al torturador, debido a que la sevicia corrompe a quien la practica, aunque el ex victimario y ahora presunta víctima pudiera, en un dictamen apasionado, merecerla. Ocurre que ningún ser humano, por inhumano que sea o parezca, es merecedor de tortura.

No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio. La fidelidad, la lealtad, la justicia son actitudes que adquieren valor en su conexión con el pasado. Nadie pretende ser fiel a un futuro, leal a un juramento que todavía no ha hecho.

Al próximo ecuánime y entrañable, que también lo hay, no le seduce la retórica del olvido sino las cuentas claras, esas que conservan enemistades. No ignora que tras esa mímica de generosidad, tras ese despilfarro de perdones, tras ese simulacro de justicia, el pasado de veras sigue intacto: con sus principios y sus riesgos, sus frustraciones y sus laureles, sus violetas y sus pavos reales, sus almas en pena y sus almas en gloria. Ocurre que el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla.

(Publicado originalmente en **Página/12** *el 2 de diciembre de 1987.)*

Un deber de justicia, un deber de no olvidar y conservar las cuentas claras, "esas que conservan enemistades". Mario Benedetti explica por qué recordar es vivir en "el pasado que es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla".

Respiraciones

Por Juan Gelman

patria mía que estás en la tierra/
y respirás como podés/
y trabajás 14 horas diarias para comer/
y 25 horas por día para vivir/

más escondida que dolor en la noche/
al dolor le pisaron un pie/
renguea por la calle militar/
ese perro está inundado de viento/
de sus pulmones sube un ruiseñor
canta bajo la luna para abrigarte/país/
sopla la noche sudamericana
para que empiece el sol sobre vos/

¿quién canta olvidando el olvido?/
pasa un sueño lleno de sed/tirado por
tu nombre/
para cuidar tu belleza incesante/
como un astro de leche/

(De *Los poemas de José Galván*, 1982.)